

Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos RIT T-23-2021, RUC 140324558-2, del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, caratulados “Vilches Morales Gastón con Fisco de Chile”, por sentencia de diez de enero de dos mil veintidós, rectificada con fecha catorce del mismo mes y año, se rechazó la acción principal de tutela laboral y se acogió la subsidiaria, en cuanto a la declaración de relación laboral y despido injustificado, desestimándola en lo que atañe a la nulidad del despido y cobro de cotizaciones de seguridad social.

El demandante dedujo recurso de nulidad, y una sala de la Corte de Apelaciones de Talca, por resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, lo rechazó.

Respecto de dicho pronunciamiento la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia para que esta Corte lo acoja y dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia.

La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que las materias de derecho que el recurrente solicita unificar consisten en determinar la procedencia del pago de cotizaciones previsionales devengadas durante la relación laboral y de la aplicación de la sanción denominada nulidad del despido, cuando la naturaleza del vínculo ha sido establecida en la sentencia definitiva.

Respecto del primer asunto, reprocha que no se haya seguido la doctrina sostenida en los fallos que apareja para efectos de su cotejo, que corresponden a los dictados por esta Corte y por la de Apelaciones de San Miguel en los antecedentes ingreso N°11.419-2019 y 467-2018, respectivamente. En ambos se declaró que la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con



la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde sufragar, dentro del plazo que la ley fija.

Indican que la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley, que se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que la empleadora debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos, desde que comenzó a pagarlas.

En cuanto al segundo, ofreció las decisiones adoptadas por esta Corte en las causas rol N°45.842-2016 y 381-2017, en las que, tras destacar el carácter declarativo de la sentencia, se concluyó que si el empleador no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso quinto del artículo 162 del Código del ramo, corresponde aplicarle el castigo pecuniario que éste prevé, consistente en el pago de las remuneraciones y demás prestaciones del trabajador que se devenguen desde la fecha del despido hasta la de su convalidación.

Tercero: Que la sentencia impugnada, en lo que interesa, rechazó el recurso de nulidad que interpuso el demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de sus artículos 162 incisos quinto a séptimo y 58, y del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500.

En sustento de la decisión, la Corte de Apelaciones compartió los razonamientos de la judicatura de mérito, en cuanto a que la declaración de una relación laboral controvertida obsta a admitir la nulidad del despido por no pago de las cotizaciones previsionales, menos aún si la empleadora es una institución pública en la que el actor se desempeñó a honorarios, lo que también impide acoger la pretensión de pago de cotizaciones previsionales por el periodo trabajado; pues la calificación del vínculo fue la consecuencia del debate que se produjo sobre el particular y de la prueba que se rindió en el juicio, lo que supone que durante el tiempo en que se mantuvo vigente, aquella situación laboral no estaba explicitada, en razón de lo cual no hubo retención de fondos destinados a pagar las cotizaciones de seguridad social.

Cuarto: Que, en consecuencia, al cotejar lo fallado en las sentencias invocadas por la recurrente, con lo decidido en la que se impugna, concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre las materias de derecho propuestas, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.



Quinto: Que, en cuanto a la aplicación de la sanción de la nulidad del despido, no obstante constatarse la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia, habida cuenta, en particular, de lo resuelto en los ofrecidos para su cotejo y en el que se impugna, lo cierto es que esta Corte considera que no procede unificar jurisprudencia, por cuanto, coincide con la decisión que estimó improcedente aplicar la sanción en examen, según lo ha declarado.

Sexto: Que las sentencias reseñadas en el considerando precedente dan cuenta que, en algún momento existieron distintas interpretaciones respecto de la materia indicada, la que se encuentra unificada por esta Corte, a partir de la sentencia dictada en la causa Rol N° 40.253-2017, reafirmandose tal criterio sin variación.

En efecto, este tribunal ha resuelto que no corresponde aplicar la sanción de la nulidad del despido a los órganos de la Administración, porque en estos casos se trata de contratos a honorarios que al menos en su origen, fueron acordados al amparo de un estatuto que les otorgaba una presunción de legalidad; y que la sanción pretendida se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado carecen de la capacidad de convalidar libremente el despido, por requerir un dictamen condenatorio previo, particularidad que los grava en forma desigual, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional y desproporcionada.

Ambos razonamientos conducen al rechazo del recurso en lo concerniente a este asunto.

Séptimo: Que, por otra parte, en lo que atañe a la obligación de pago de cotizaciones de seguridad social, cabe reiterar la premisa general invariablemente asumida por esta Corte, expresada, entre otras, en las causas ingreso N°14.137-2019, 18.540-2019, 19.116-2019, 29.471-2019, 28.932-2019 y 24.589-2020.

En todas ellas se ha razonado en términos que el artículo 58 del Código del Trabajo dispone que: *“El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...”*.

Agregan los fallos que dicho descuento que afecta las remuneraciones de los trabajadores tiene el carácter de obligatorio, conforme lo regula el artículo 17 del Decreto ley N° 3.500, que expresa: *“Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...”*, deber que se ve reforzado por el tenor expreso del artículo 19 de dicho estatuto que previene: *“Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador (...) en la Administradora de Fondos*



de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...".

Su inciso segundo añade que *"Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo..."*.

Por lo que esta Corte ha concluido que nuestro ordenamiento considera que el enterero de los aportes que deben pagar los trabajadores para los efectos previsionales, corresponde a una obligación que le compete al empleador, mediante descuento que debe efectuar de las remuneraciones del trabajador, a fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que fija la ley; y que el carácter imponible de los haberes es determinada por el legislador, de modo que es una obligación inexcusable del empleador, atendida la naturaleza de las remuneraciones, realizar las deducciones pertinentes y efectuar su posterior e íntegro entero en los organismos previsionales respectivos desde que se comenzaron a pagar las remuneraciones.

Esta postura está reafirmada por el artículo 3°, inciso segundo, de la Ley 17.322, que establece que *"Se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores. Si se hubiere omitido practicar dichos descuentos, será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden"*.

Presunción, esta última, a cuyos efectos no resulta relevante distinguir si la existencia de la relación laboral formó parte de lo discutido en el juicio y, por consiguiente, fue declarada en la decisión que se impugna, atendidos los argumentos previos y el carácter declarativo que tiene la sentencia laboral, que esta Corte también ha reconocido en forma invariable, como se advierte de las sentencias pronunciadas en los antecedentes N°6.604-2014, 9.690-15, 40560-16, 76.274-16, y 3.618-17, entre otros, en los que se ha expresado que el pronunciamiento judicial sólo constata una situación preexistente, de manera que la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, sea que se les haya dado esa u otra denominación.

Octavo: Que, dicho lo anterior y siendo ese el marco general en materia de obligación de pago de cotizaciones de seguridad social, esta Corte, en decisiones previas, ha efectuado una serie de precisiones referidas a dos aspectos.

Por una parte, ha reconocido los efectos jurídicos de la conducta desplegada por el trabajador que paga directamente sus cotizaciones o que



asume el cumplimiento de tal carga, incorporando una cláusula en tal sentido en el contrato de prestación de servicios a honorarios; y, por otra, se ha distinguido entre los diferentes riesgos que administra la seguridad social, atendida la forma en que se concreta el deber de contribución del afiliado en cada uno y cómo ello afecta la obtención de la contraprestación que el sistema ofrece.

En efecto, tratándose del primer aspecto mencionado, a partir de la sentencia dictada en causa rol N° 35.653-2021, seguida de las emitidas en los ingresos 41.026-2021, 98.552-2022 y 106.732-2023, entre otras, se ha sostenido sin variación la improcedencia de condenar al pago de las cotizaciones de seguridad social cuando el trabajador las ha enterado directamente ante los organismos respectivos. Para ello se ha considerado que el objetivo perseguido a través de la obligación consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo, también puede ser alcanzado cuando es el trabajador quien paga directamente sus cotizaciones de seguridad social ante los organismos administradores, evitando la existencia de las denominadas “lagunas” en su cuenta de capitalización individual y habilitándolo para acceder a los beneficios que financian, por lo que no hay un daño previsional que reparar, lo que torna en improcedente ordenar un doble pago de la prestación que se trata, de manera que sólo procedería la condena cuando las referidas cotizaciones no hayan sido previamente enteradas y sólo en la parte que se adeude.

El mismo criterio se ha aplicado cuando el trabajador asume la obligación de efectuar directamente el pago de sus cotizaciones previsionales, mediante una cláusula incorporada en el contrato de honorarios respectivo, sea que la haya cumplido o no, pues ello aparece como una consecuencia de lo razonado a propósito de la aplicación de la sanción de la nulidad del despido a este tipo de casos, dado el origen de la contratación y la presunción de legalidad que lo amparó, lo que permite dar valor también a este tipo de cláusulas que no son procedentes en un contrato de trabajo ordinario, nacido a partir del acuerdo de voluntades de las partes que aceptan obligarse en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo.

En la sentencia dictada en causa rol N°98.552-2022, se declaró que si el actor se obligó a enterar directamente las cotizaciones en los organismos pertinentes, cualquier deuda que pueda existir y perjuicios que de ello se deriven serán consecuencia de su propio incumplimiento, por lo que no hay un daño previsional que pueda ser imputado al demandado, lo que torna en improcedente la condena a solucionarlos.

Esta última hipótesis con la sola excepción de las cotizaciones destinadas a financiar el seguro de cesantía establecido por la Ley N°19.728. En efecto, el



pacto cuyos efectos jurídicos se reconocen, supone que el trabajador, formalmente denominado “prestador de servicios” durante la vigencia del vínculo, debió asumir directamente el pago de sus cotizaciones de seguridad social en conformidad a lo dispuesto por la Ley N°20.255, que, sin perjuicio de su entrada en vigencia diferida en este punto, modificó el Decreto Ley N°3.500, de 1980, entre otros cuerpos legales, e hizo obligatorio para los independientes el pago de una serie de cotizaciones de seguridad social, en particular, las destinadas a financiar los sistemas previsionales, de salud común (Isapre y Fonasa) y de salud profesional, pero, no consideró las del seguro de cesantía. Estas últimas nunca se entendieron incorporadas en los pactos de honorarios, por lo que, una vez esclarecida la naturaleza del contrato, deben ser solucionadas por el empleador en los términos que más adelante se indicará.

Noveno: Que, en conformidad a lo previamente expuesto, es posible asentar que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales, de cesantía y de salud, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que tratándose de contrataciones originadas en un contrato de prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en su origen por la presunción de legalidad y en el que el prestador de servicios tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial.

En consecuencia, de no existir tal cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios, y siempre que el pago de las cotizaciones no haya sido totalmente solucionado por el trabajador, aquél deberá ser cumplido por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que el artículo 19 del Decreto Ley 3.500 y la Ley N°17.322 imponen al empleador que paga fuera del plazo que la normativa establece, pues de acuerdo a los incisos 7, 10 y 11 del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y a los artículos 21 y 22 a) de la Ley N°17.322, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal que establecen.

Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo. Es por ello que tales organismos para convalidar el



despido, una vez calificada tal relación como laboral, requieren de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la tantas veces mencionada presunción de legalidad.

Por lo expuesto, debe concluirse que en tales circunstancias no puede tenerse a los organismos de la Administración como deudores en mora o incumplidores para estos efectos, pues resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.

Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador, amparado por la referida presunción, deberán ser incrementadas con reajustes, calculados desde la oportunidad que indican el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322, y con intereses, los que sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quedó ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en la Ley 17.322, pues considerando lo dicho se descarta la aplicación de intereses penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.

Además, a fin de mantener la debida concordancia con los razonamientos antes expuestos acerca del origen del contrato celebrado entre las partes, el cobro de dichas cotizaciones deberá excluir las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500 y 22 a) de la Ley 17.322.

Décimo: Que, por último, en materia de cotizaciones de seguro de cesantía debe efectuarse una prevención adicional, dado que su financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en cuanto a previsión y salud, es tripartito, conformándose por aportes del trabajador, del empleador y del Estado.

Tratándose de dependientes con contrato de trabajo indefinido, como ocurre en el caso, la contribución al seguro, según lo prevé el artículo 5 de la Ley N° 19.728, se divide en un 0,6% de las remuneraciones imponibles de cargo del trabajador; un 2,4% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador y un aporte del Estado que corresponde a un monto global que se entera anualmente.

Entonces, sobre la base de lo dicho, en el caso del trabajador que no registra pago de estas cotizaciones durante la vigencia del contrato, sea efectuado por él o por su empleador, se declarará que es este último quien debe solucionarlas, pero, limitadas al porcentaje que es de su cargo y no el que corresponde solventar al trabajador con su patrimonio, porque, con ello, se



configuraría un pago doble, gravando en forma desmedida y desigual al ente público.

Undécimo: Que, lo anterior debe ser contrastado con los hechos asentados en el caso, en que se estableció que el demandante prestó servicios en la Unidad de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección Regional de Aguas del Maule, bajo condiciones propias de un contrato de trabajo, entre el 23 de febrero de 2015 y el 31 de agosto de 2020.

En dicho período la demandada no retuvo fondos para el pago de cotizaciones de seguridad social, ni tampoco las enteró en los organismos pertinentes._

Consta, además, de los antecedentes que, en todos los contratos suscritos por las partes, se acordó que sería de exclusiva responsabilidad del asesor, tanto su afiliación, como la declaración y pago de sus respectivas cotizaciones al Sistema de Pensiones, al Sistema de Salud, al Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de conformidad a la legislación vigente.

Asimismo, los oficios a los organismos previsionales a los que se afilió el actor dan cuenta que éste cumplió parcialmente con tal obligación, enterando cotizaciones previsionales desde enero de 2018 a diciembre de 2020; de salud durante los meses de abril y junio de 2017, julio a diciembre de 2019, y de enero a agosto de 2020; y sin efectuar pago alguno a efectos de cesantía.

Duodécimo: Que, por consiguiente, atendido lo pactado por las partes en materia de pago de cotizaciones previsionales y de salud, procede ordenar sólo el pago de las correspondientes al seguro de cesantía, por todo el lapso de vigencia del contrato, esto es, desde el 23 de febrero de 2015 al 31 de agosto de 2020, pero, sólo respecto de la porción de cotización de cargo del empleador, equivalente al 2,4% de la remuneración imponible.

Décimo tercero: Que, en tal circunstancia, yerra la Corte de Apelaciones de Talca al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante. En efecto, sobre la premisa de lo que se ha venido razonando, debió declararse la infracción de ley cometida, en relación a los artículos 58 del Código del Trabajo y 19 del Decreto Ley N°3.500, al no ordenar el pago de las cotizaciones de cesantía.

Décimo cuarto: Que, por las consideraciones antes dichas, no cabe sino acoger parcialmente el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante en lo que concierne al cobro de cotizaciones de cesantía, invalidando, en lo pertinente, el fallo impugnado y procediendo a dictar, acto seguido y en forma separada, la correspondiente sentencia de reemplazo.

Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge**, en lo pertinente, el



recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante respecto de la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, que rechazó el de nulidad interpuesto en contra de la sentencia de diez de enero de dos mil veintidós, rectificada con fecha catorce del mismo mes y año, emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en autos RIT T-23-2021, RUC 140324558-2, y se declara que dicha sentencia es **nula parcialmente**, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.

Se **previene** que el ministro señor Llanos, estuvo por acoger el recurso íntegramente en lo que atañe al cobro de cotizaciones de seguridad social, y ordenar el pago de todas las aquellas devengadas durante la vigencia del contrato que no hayan sido previamente solucionadas, por compartir los razonamientos expresados en las sentencias ofrecidas por el recurrente, habida cuenta que tratándose de una relación regida por el Código del Trabajo, debe aplicarse lo dispuesto en su artículo 58, que consagra la obligación previsional pormenorizada en el artículo 19 del Decreto Ley N°3.500, poniendo su cumplimiento de cargo del empleador.

Regístrese.

Rol N° 25.296-22.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., señor Leopoldo Llanos S., señora María Cristina Gajardo H., y los abogados integrantes señores Eduardo Morales R., y Gonzalo Ruz L. No firma el abogado integrante señor Ruz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ
SANCHEZ
MINISTRA
Fecha: 24/10/2023 11:07:24

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 24/10/2023 12:30:52

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 24/10/2023 11:07:25

EDUARDO VALENTIN MORALES
ROBLES
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 24/10/2023 11:10:22



En Santiago, a veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada; así como los razonamientos séptimo a duodécimo de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que son hechos acreditados que el demandante prestó servicios en favor de la demandada, bajo subordinación y dependencia, en los términos descritos en el artículo 7° del Código del Trabajo, los que se iniciaron el 23 de febrero de 2015 y concluyeron el 31 de agosto de 2020, cuando fue despedido sin cumplimiento de las formalidades previstas por el artículo 162 del Código del Trabajo.

Segundo: Que el trabajador se obligó a pagar directamente sus cotizaciones previsionales y de salud durante toda la vigencia del contrato, sin incluir en dicho pacto las correspondientes a seguro de cesantía, por lo que deberá ordenarse su entero, en relación a todo el período servido, pero, limitadas al porcentaje de cargo del empleador.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 63, 67, 162, 168, 172, 173, 183-A, 183-B, 446 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que **SE RECHAZA** la demanda principal de tutela laboral deducida por don Pedro Ignacio Peña Sánchez, mandatario judicial de don Gastón Darío Vilches Morales, en contra del Fisco de Chile, representado por don José Isidoro Villalobos García-Huidobro, procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado de la Región del Maule.

II.- Que **SE ACOGE** la demanda subsidiaria, en cuanto se declara que entre las partes existió una relación laboral, desde el 23 de febrero de 2015 al 31 de agosto de 2020, y que el despido de que fue objeto el actor fue injustificado, por lo que se condena a la demandada pagar las siguientes prestaciones:

- a) Indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma de \$1.665.433.-
- b) Indemnización por años de servicio, por un monto de \$9.992.598.-
- c) Recargo del 50% respecto de la indemnización por años de servicio conforme la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, por la suma de \$4.996.299.-
- d) Feriado proporcional, por la suma de \$555.144.-



e) Cotizaciones de cesantía devengadas desde el 23 de febrero de 2015 al 31 de agosto de 2020, limitadas al 2,4% de la remuneración imponible antes señalada.

III.- Que las sumas referidas y condenadas a pagar en las letras a) a d) lo serán debidamente reajustadas y con los intereses previstos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

IV.- Que las cotizaciones ordenadas pagar en la letra e) devengarán los reajustes que ordenan los artículos 19 del Decreto Ley N°3.500 y 22 de la Ley 17.322, calculados desde la época y en los términos que indican, e intereses calculados conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo, y únicamente desde la época en que esta sentencia quede ejecutoriada, sin considerar la aplicación de multas.

V.- Que **SE RECHAZA** la demanda en lo demás.

VI.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese y devuélvase.

N° 25.296-22.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., señor Leopoldo Llanos S., señora María Cristina Gajardo H., y los abogados integrantes señores Eduardo Morales R., y Gonzalo Ruz L. No firma el abogado integrante señor Ruz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés.

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ
SANCHEZ
MINISTRA
Fecha: 24/10/2023 11:07:26

LEOPOLDO ANDRES LLANOS
SAGRISTA
MINISTRO
Fecha: 24/10/2023 12:30:53

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 24/10/2023 11:07:27

EDUARDO VALENTIN MORALES
ROBLES
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 24/10/2023 11:10:25



En Santiago, a veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

